12 Cuadernos del Centro de Pensamiento

VIOLENCIA POLÍTICA EN LOS AÑOS 30: DE CAPITANEJO A GACHETÁ

Julio de 2015

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA | CENTRO DE PENSAMIENTO

CUADERNOS DEL CENTRO DE PENSAMIENTO No. 12

VIOLENCIA POLÍTICA EN LOS AÑOS 30: DE CAPITANEJO A GACHETÁ

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA | CENTRO DE PENSAMIENTO

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA
CUADERNOS DEL CENTRO DE PENSAMIENTO No. 12

VIOLENCIA POLÍTICA EN LOS AÑOS 30:
DE CAPITANEJO A GACHETÁ

© José Ángel Hernández García
Departamento de Historia
Universidad Sergio Arboleda

Edición: julio de 2015.
Queda prohibida toda reproducción por cualquier medio
sin previa autorización escrita del editor.
Edición realizada por el Fondo de Publicaciones.
Universidad Sergio Arboleda.
Carrera 15 No. 74-40.
Teléfonos: (571) 325 7500, ext. 2131. Fax: (571) 317 7529.
www.usergioarboleda.edu.co

DIRECTOR EDITORIAL
Jaime Barahona Caicedo
jaime.barahona@usa.edu.co
Teléfono: (571) 325 75 00
REVISIÓN DE PRUEBAS
Ludwing Cepeda A.
DIAGRAMACIÓN
Jimmy F. Salcedo S.
DISEÑO CARÁTULA
Adriana Torres
IMPRESIÓN
Digiprint, Bogotá, D. C.
ISSN: 2346-4313

CONTENIDO

VIOLENCIA POLÍTICA EN LOS AÑOS 30:
DE CAPITANEJO A GACHETÁ 5

ARRIBO DEL LIBERALISMO AL PODER Y FIN
DE LOS GOBIERNOS CONSERVADORES 9

CAPITANEJO, HITO Y COMIENZO
DE LA REPRESIÓN LIBERAL 13

LA REVOLUCIÓN EN MARCHA 21

PAUSA A LA REVOLUCIÓN EN MARCHA
Y CONTINUACIÓN DE LA VIOLENCIA 27

CONCLUSIÓN.....33

VIOLENCIA POLÍTICA EN LOS AÑOS 30: DE CAPITANEJO A GACHETÁ

Los años treinta comenzaban en Colombia con el regreso de los liberales a las labores de gobierno, lo que desencadenó la reacción del Partido Conservador, que se sintió perseguido por la policía y los gobernadores nombrados por el nuevo el ejecutivo liberal. Esta violencia, tanto conservadora como gubernamental alcanzó sus máximas cuotas en los departamentos de Santander y Boyacá.

Lo cierto e incuestionable es que Colombia, a lo largo de su corta existencia y desde el fin del dominio español, ha visto cómo se sucedían sin solución distintos conflictos de tinte violento que contribuían a exacerbar la división social, según algunos, debido a la bipolarización extrema que representaba el que el espectro político y electoral estuviera copado casi en exclusiva por el Partido Liberal y el Partido Conservador.

En la década de los treinta, la cerrada, hasta ese momento Colombia empezaba a ser permeada por los cambios políticos, sociales y económicos de allende sus fronteras. Los totalitarismos, tanto de izquierdas como de derechas, se imponían en Europa y eso se notó en la política colombiana.

Para finales del decenio de los años veinte, Colombia sufrió un corte del crédito externo que debía sus causas a la crisis económica mundial de 1929. Hasta ese momento las exportaciones de Colombia hacia el exterior se duplicaron debido, casi en exclusiva, a la venta de petróleo y café los cuales no habían dejado de incrementar su precio en los mercados y que junto a la indemnización por la requisa de Panamá por parte de los norteamericanos, unos veinticinco millones de dólares, nos hablan de un panorama cuanto menos afable de la economía nacional, lo que derivaba en una tranquilidad social por lo menos aparente si lo comparamos con lo que iba a venir.

Las secuelas de la crisis bursátil mundial se empezaron a manifestar en Colombia a finales de 1928, cuando el precio del café se derrumbó ocasionando que para el siguiente año Colombia se sumiera en un angustioso y depresivo marasmo cuyo exponente máximo es la paralización de las obras públicas, en un descenso de los precios y en despidos de trabajadores de manera generalizada.

Este panorama afectó a todos los países de América Latina, forzando la caída de gobiernos que detentaban el poder hasta ese momento y el advenimiento de opciones políticas izquierdistas, en muchos casos inéditas, como la del APRA en Perú, o dictatoriales, como es el caso de Argentina.

Colombia, por su parte, ve cómo el 8 de enero, treinta mil liberales proclaman en la plaza de Bolívar la candidatura del político liberal Enrique Olaya Herrera. El presidente, en ese momento Miguel Abadía Méndez, previsor de la que se cernía sobre él en el campo político e intentando congeniarse con las masas populares, deseosas de cambio, crea una junta protectora para los obreros desempleados dependien-

tes del Ministerio de Industria y Trabajo, medida esta, entre otras que buscan dar un tinte más social al casi extinto ejecutivo conservador. Ante la inminencia del arribo al poder del liberalismo en cabeza de Olaya Herrera, la resignación conservadora es evidente y el miedo a represalias liberales después de años de hegemonía conservadora es palpable.

ARRIBO DEL LIBERALISMO AL PODER Y FIN DE LOS GOBIERNOS CONSERVADORES

El 9 de febrero Olaya Herrera es elegido presidente. Tendrá que gobernar con la oposición de lo más tradicional e intransigente del Partido Conservador, lo que era la mayoría del partido y con el antagonismo de la Iglesia colombiana, también inquieta por las propuestas laicistas del ahora gobierno liberal.

El día 21 de ese mismo mes, el Directorio Nacional Conservador reconoce la victoria del liberalismo y los braceros de Puerto Colombia que estaban en paro cesan la huelga ilusionados por la llegada del nuevo gobierno.

Parecería que el gabinete de Olaya tuviera un tranquilo porvenir por delante, pero como veremos no será así. Olaya se dispone a gobernar con la sombra cómplice, pero también vigilante, de Alfonso López, artífice en gran parte de la victoria del ahora presidente[1].

Los conservadores, mientras tanto, aún no repuestos de la victoria liberal y desprovistos del poder, ven como lo que

[1] Para saber más: *Olaya Herrera, político, estadista y caudillo*. Imprenta Nacional, 1979.

eran propuestas electorales del liberalismo empiezan a pasar de las amenazas a la práctica. A mediados de julio se emite una orden de detención contra el gerente de la United Fruit y un nuevo político, Jorge Eliécer Gaitán, de manera vehemente denuncia en la cámara los supuestos atropellos a los jornaleros y labriegos. El ambiente político se enrarece y con ello también el social y de orden público.

La prensa conservadora llama a la oposición cívica, en cuya labor se destacará el periódico *El Derecho*, de Pasto, dando el pistoletazo de salida a la feroz reacción conservadora.

Una oposición que contará con el apoyo de las clases trabajadoras desempleadas duramente marcadas y por la crisis que exigen con protestas el derecho al trabajo. Los funcionarios, por su parte, exigirán el pago de los salarios no cobrados y se manifestarán junto a los más pobres que, a través de las llamadas "marchas del hambre", pedían no ya trabajo, sino comida.

Los conservadores, por su parte, denunciaban el fin de la paz conservadora en el país que se decía que había sido tónica en la república hasta la llegada del liberalismo. Desde la izquierda del liberalismo, se empiezan a conformar propuestas políticas alternativas como la del Partido Comunista Colombiano, al que le parecen demasiado laxas las reformas de Olaya, adhiriéndose a la línea ortodoxa de la Internacional Socialista. También, y siguiendo el ejemplo del APRA peruano, surgirá con el liderazgo de Jorge Eliécer Gaitán, el UNIR (Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria). El Partido Comunista se convertirá en una fuerza poco significativa en cuanto a votos, pero de indudable influencia en los últimos años de la legislatura de Olaya y casi toda la del primer gobierno de López. La UNIR, por su

parte, amenazará hasta el asesinato de su líder Gaitán con romper el tradicional bipartidismo colombiano[2].

La tensión era palpable y no parecía haber nadie que la mitigara y el Estado no tenía medios, sirva de ejemplo decir que el ejército de no más siete mil efectivos no tenía capacidad operativa y la nueva policía liberal estaba más ocupada en la represión de la reacción conservadora que en ser ecuánime. Por otra parte, en las veredas, tradicional feudo conservador, la mayoría de las veces las labores de orden público eran detentadas por la policía departamental, una policía politizada en grado máximo y que muchas veces era rechazada vehemente por el elemento local.

Esta tirantez menguó de manera significativa cuando soldados del Perú ocuparon en septiembre de 1932 el Puerto de Leticia, despertando un sentimiento de unidad nacional que apagó los diferendos por un tiempo. Acabado el conflicto con la firma del protocolo de Río de Janeiro en 1934, las aguas volvieron a su cauce, es decir, la violencia sectaria retornó al territorio nacional.

Como ya dijimos, la violencia se manifestó en los primeros años de gobierno de Olaya en los departamentos de Boyacá y Santander. La ciudad de Chiquinquirá y el occidente de Boyacá destacaron por su inestabilidad, lo mismo que la provincia de García Rovira y algunos pueblos del norte de Santander.

La abrupta toma de posesión de los puestos gubernativos por parte de los novatos funcionarios liberales no fue asumida de buena manera por los conservadores que habían detentado esos cargos durante cuarenta y tres años.

---

[2] MEDINA PINEDA, Medofilo. *Los terceros partidos en Colombia 1900-1967*. Nueva Historia de Colombia. Bogotá, Editorial Planeta, 1989.

Los nuevos funcionarios liberales que durante años habían estado casi ocultos, alardeaban de su victoria ocasionando una violenta reacción conservadora que contó con el apoyo de la Iglesia, y los liberales contaron con el soporte de la nueva policía liberal.

Las denuncias del Partido Conservador y de su combativo líder Laureano Gómez con respecto a constantes arbitrariedades de las autoridades liberales fueron continuas, máxime cuando el Gobierno promocionó un nuevo sistema de registro de votantes que exigía a todo posible elector la necesidad de solicitar al registrador local, liberal, una tarjeta que debía exhibir ante las autoridades electorales como aval de haberse registrado. Los conservadores interpretaron esta medida como un intento evidente por debilitar a su partido, cuyo Directorio Nacional decretó la abstención electoral y prohibió a sus afiliados y simpatizantes trabajar para la administración.

Son los años treinta, por tanto, unos años convulsos y violentos en los que a la reacción conservadora contesta la represión liberal, esta última con el aparato del Estado a su disposición. En el ineludible trabajo *La violencia en Colombia,* Orlando Fals Borda, Germán Guzmán Campos y Eduardo Umaña Luna señalan los años treinta y los departamentos de Boyacá y Santander como las áreas de restringida violencia política, no dándole más importancia en otras zonas de la República de Colombia, pero sin dejar de destacar que el peso de la represión estatal se centró en el Partido Conservador.

CAPITANEJO, HITO Y COMIENZO DE LA REPRESIÓN LIBERAL

Para Javier Guerrero, el detonante del conflicto regional fue la conocida como la matanza de Capitanejo en Santander, sirviendo también decir que dicha "matanza" fue el primer referente importante para explicar la violencia que se dio en la década de los años treinta en Colombia.

El asesinato de una quincena de conservadores junto con medio centenar de heridos en el municipio de Capitanejo, marcó un hito en el martirologio conservador y la violencia partidista se acrecentó, aún más en algunos departamentos ya de por sí en estado de perpetua ebullición partidista, como era el caso de Santander.

Las acusaciones por dicha masacre fueron múltiples y los periódicos de uno y otro sesgo no ayudaron a poner las cosas claras. Lo que se sabe es que las nuevas autoridades liberales del departamento, acaudilladas por el incondicional miembro del partido y flamante gobernador Alejandro Galvis, se habían afanado en nombrar a hombres de irrestricta fidelidad liberal, como era el caso del secretario de Gobernación y edecán de Galvis, Felipe Cordero. El señor

Cordero era oriundo de la provincia de García Rovira, una tierra quebrada, montañosa, minifundista y de mayoría liberal aunque con algunos núcleos minoritarios conservadores que mientras sus copartidarios habían detentado el poder no habían sido molestados por la mayoría liberal.

El nombramiento como burgomaestre de Málaga del veterano general liberal de la Guerra de los Mil Días, Virgilio Amado, auguraba mano dura. El control férreo y la fidelidad de una nueva policía liberal que había sustituido a los adeptos del anterior gobierno causaron una ostensible congoja en los minoritarios y ahora desplazados conservadores de la región.

Pero no solo se miró con suspicacia el arribo de las nuevas autoridades por parte de los conservadores, sino también por las autoridades eclesiásticas. Dos sacerdotes, José María Castilla y Daniel Jordán, estuvieron en la mira de las nuevas directivas departamentales por aquellos días al atribuírseles arengas incendiarias de jaez antiliberal. La pretensión de los nuevos alcaldes de Guaca, Constantino Rueda y de Capitanejo, Ezequiel Herrera, era la de restaurar la verdadera mayoría liberal que había sido restringida allá por 1885 y que no se reflejaba en las listas de votación. Esta revisión de los censos electorales debía ser rápida, pues los comicios departamentales se acercaban y estos tenían que reflejar la real composición política de dicha jurisdicción.

A finales del año 1930 los conservadores de la provincia empezarán a desplazarse a las cabeceras municipales para asegurar su presencia en las listas electorales. El desplazamiento para estas gentes no era fácil, las hostilidad de las veredas y municipios liberales por los que debían transitar hasta llegar a las alcaldías era predecible, por lo que la

mayoría de ellos iban armados en prevención de enfrentamientos que parecían inevitables máxime cuando ya no contaban con la protección de una policía afecta, como había sido desde la época de Rafael Núñez.

El día 29 de diciembre un grupo de simpatizantes del Partido Conservador, comandados por Alejandro Herrera, se dirigía al municipio de Capitanejo procedente de las montañas del Cocuy, zona de acendrado conservatismo. En la plaza del pueblo y más concretamente en la sede del juzgado electoral, les aguardaban la policía y numerosos paisanos liberales que avisados de su venida se habían concentrado en el lugar.

El diario *El Tiempo* posteriormente informará que los conservadores habían sido convenientemente enervados al ingerir aguardiente y cocaína, lo que ha de tomarse con reserva al ser *El Tiempo* el principal rotativo liberal de la época y por ello arbitrario. Lo cierto es que al llegar a la plaza del pueblo, los insultos e intercambios de improperios se generalizaron y los conservadores parecieron retirarse al exhibir la policía y sus adláteres armas en modo amenazante. Esto no permitió el registro electoral de los conservadores, por lo menos durante el día; por la noche se fueron acercando a la población individuos conservadores que se unieron al primer contingente así como liberales procedentes de las veredas cercanas. Continuaron las amenazas e insultos. Pero durante la noche y la mañana siguiente no se reportaron enfrentamientos físicos. El estallido se dio en la tarde cuando comenzaron los disparos. Numerosos cuerpos sin vida se acumularon en la plaza y se desangraban al no cesar el intercambio de proyectiles que duró todo el día.

El que una mayoría de los muertos y heridos fueran conservadores pareció ser la muestra palmaria, para estos, de la

parcialidad y sevicia de las nuevas autoridades y fuerzas de seguridad liberales.

El grave incidente de Capitanejo no fue el único de los numerosos enfrentamientos entre seguidores de los dos principales partidos políticos colombianos y de estos con terceros. Un año después, en la población de Guaca, murieron en enfrentamientos partidistas catorce personas. Para el gobernador Galvis, los culpables e incitadores de todas estas escaramuzas eran los conservadores, que con la complicidad del clero se dedicaban a provocar y agredir a las autoridades y militantes liberales.

Es innegable que los años treinta comenzaban con un aumento de la violencia política que no se había dado durante la hegemonía conservadora, por lo menos en ese volumen, lo que para algunos sería explicable por el aparato represor conservador que les había permitido detentar todos los organismos del Estado y así intimidar al contrario. La resistencia de los conservadores más reaccionarios a la nueva administración liberal por los medios más violentos explicaría este estallido de violencia para algunos historiadores. Esta versión sería irrebatible y para ello arguyen los intentos de la administración Olaya por consensuar con los conservadores e incluso admitirlos en labores de gobierno; todo ello se encontraría con la oposición de lo más reaccionario del Partido Conservador, por tanto, culpable de la violencia desatada.

Bien pronto se comprobó de lo inútil de este supuesto intento de colaboración con los conservadores, la hermandad partidista en labores de gobierno era más representación que una realidad. La separación abrupta de los conservadores del funcionado estatal y la creación de una policía fervientemente liberal, con más efectivos que el Ejército, explicarían, en parte, el estruendo violento que se desató en

Colombia por esos años. Como añadidura, los actos violentos que eran investigados, lo eran por unas autoridades gubernamentales que eran percibidas por los conservadores como parciales, en el mejor de los casos.

El jefe del Partido Conservador, Laureano Gómez, se refería así al clima violento de esa época:

> Una impunidad general, sin excepción, irritante en el más alto grado, a protegido todos los millares de asesinos, incendios violencias, estupros y atropellos cometidos contra los conservadores por los agentes del gobierno y del liberalismo. Cuando secciones de las fuerzas de policía nacionales y departamentales salieron por la provincias indiscutibles mayoría conservadora sembrando el pavor con la muertes, la quema de las habitaciones y los robos de los escasos bienes de los campesinos, si se presentaba quejas por tantos atropellos, eran los mismos oficiales de esas fuerza[s] los encargados de instruir los sumarios, quedaban como consecuencia inmediata la prisión del declarante y sus testigos.

Así no era como lo veían los liberales, que denunciaban la violencia conservadora como única y especialmente cruel, entendiendo los liberales como única y también conservadora la proveniente de la escisión del Partido Conservador conocida como los Leopardos, grupo a la derecha de este partido, que había proclamado la "Acción Directa" que tanto habían pregonado los fascismos de uno y otro lado del Atlántico, o como decía José Antonio Primo de Rivera, la política "de los puños y las pistolas"[3].

El gobierno central preocupado por el clima de violencia de los departamentos de Santander y Boyacá y por verse cada

[3] HERNÁNDEZ GARCÍA, José Ángel. *Los leopardos y el fascismo en Colombia.* Historia y Comunicación Social, Universidad Complutense, v. 5, pp. 221–229, España, 2000.

vez más señalado de parcialidad, decidió presentar en el congreso un pomposamente llamado "Plan de Pacificación de Santander, Norte de Santander y Boyacá". Este plan de pacificación preveía la creación de un juzgado y fiscalía en Málaga, Santander, que no llegó a ejercer por falta de presupuesto. Lo que si se hizo es empezar por implementar medidas que desarmaran a la población y controlarán los explosivos y su manipulación. Todo quedó en intenciones y apelando a la legítima defensa los dos bandos, se produjeron graves incidentes en Lebrija y San Andrés, en el mismo departamento, y Chita y Sutamarchán en Boyacá. Era evidente que las proclamadas medidas anunciadas a bombo y platillo no hicieron más que agudizar la crisis por la poca vocación de implementación de las autoridades.

Las relaciones entre los dos partidos se tensaron aún más con el proceso, patrocinado por el gobierno, de cedulación obligatoria, que fue tomado por el conservatismo como una declaración de guerra. Como apunta Javier Guerrero, "la República Liberal estaba en su peor crisis de legitimidad y el experimento estaba a punto de fracasar"[4].

Cuando la República Liberal estaba a punto de colapsar, las tropas peruanas, sin aviso previo y con alevosía, invadieron el puerto colombiano de Leticia. Fue un salvavidas para un gobierno liberal acosado y acusado por su mal manejo del orden público, además de su parcialidad. Tal fue la solidaridad que despertó en todo el país la incursión peruana en el Amazonas, que parecieron aparcarse los enfrentamientos y nadie hablaba del déficit fiscal, ni de la violencia, ni de

[4] GUERRERO BARÓN, Javier. *El proceso político de las derechas en Colombia y los imaginarios sobre las guerras internacionales 1930-1945*. Boyacá, Editorial Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 2014.

la policía liberal, ni de la insurrección conservadora…, se había impuesto la Unidad Nacional.

Laureano Gómez declamó un discurso de reconciliación en el Senado pronunciando la frase "Paz, paz en el interior y guerra, en la frontera contra el enemigo felón". El conflicto con el vecino Perú afianzó, quizá como nunca antes, el sentimiento de unidad nacional y apuntalando al gobierno liberal y marcando una nueva ruta en las relaciones de los dos partidos políticos[5].

La prensa se hizo rápidamente eco de este nuevo clima de Unidad Nacional y el principal diario nacional publicó lo siguiente:

> elevada, generosa y patriótica actitud de aquellos ciudadanos de Santander, Santander Norte y Boyacá que al recibir noticias del peligro que la soberanía nacional corre en el sur de Colombia, no han vacilado en deponer todos sus antiguos resentimientos y en reunirse como hermanos[6].

A ningún estudioso del tema le cabe la menor duda de que la invasión de Leticia por parte del Perú le vino como anillo al dedo a un gobierno como el de Olaya al borde del colapso. La violencia cesó casi totalmente, y el contencioso con Perú se solucionó beneficiosamente para Colombia, acrecentando el prestigio interno y externo del gobierno. Por si fuera poco, el déficit presupuestario se mitigó casi totalmente con las donaciones altruistas de los ciudadanos que no sólo pudieron hacer posible la creación de una fuerza militar de rechazo al invasor, sino que generaron sobrantes para colmar las depauperadas, hasta ese momento, arcas del Estado.

---

[5] DONADÍO, Alberto. *La guerra con el Perú*, Bogotá, Editorial Hombre Nuevo, 2002.

[6] *El Tiempo*, Bogotá, 21 de septiembre de 1932, p. 1.

LA REVOLUCIÓN EN MARCHA

Llegó el año 1934 y el candidato liberal Alfonso Gómez Pumarejo, aprovechando la abstención conservadora, se hizo con las riendas del país. Comenzaba así un periodo de radicalización laicista que exacerbó aún más los enfrentamientos políticos y sociales. La radicalización de los debates parlamentarios se traducía en violencia callejera y de vereda, y la legislatura de López tuvo que lidiar con la acción violenta de los actores políticos una vez más. Los dos partidos políticos se volvieron a armar y la extremización de las reformas patrocinadas por el gobierno, conocidas como las de la revolución en marcha y la violenta e inmisericorde respuesta conservadora, volvieron a poner al país al borde de la guerra civil.

De manera simultánea estalló, allende los mares, la Guerra Civil Española, principal conflicto del periodo de entreguerras y –al igual que otros países, pero especialmente en los hispanoamericanos– la opinión pública se dividió entre franquistas y republicanos. Se creía que de lo que saliera de la guerra fratricida en España dependía el futuro de Colombia, es decir, o una Colombia comunista o una Colombia inclinada hacia el fascismo. Los conservadores denunciaban

que ese conjunto de reformas políticas, jurídicas y sociales que eran la Revolución en Marcha habían sido copiadas de la Constitución republicana y atea de España, se decía[7]. En parte no les faltaba razón. Como declararon algunos prestantes políticos liberales, el ejemplo de la República Española inspiró sobremanera al gobierno y al Partido Liberal, al ser un proceso político que tenía algunas similitudes con el colombiano, como en la coincidencia del fin de la monarquía en España con el fin de la hegemonía conservadora en Colombia, abriendo, en los dos casos, la puerta hacia una nueva visión política de izquierdas y laicista.

La personalidad combativa de Laureano Gómez y la determinación del presidente López por instaurar sus revolucionarias políticas sociales auguraban un periodo de cualquier manera menos sosegado.

El que se entorpeciera por parte de los funcionarios liberales la cedulación de ciudadanos conservadores fue denunciado por estos como una muestra más de la deliberada política de obstrucción del ejercicio de los derechos de los conservadores. No está de más apuntar que la escasa presencia institucional en el territorio nacional no hacía necesaria una cedulación de la población, funcionando como identificación del individuo la fe de bautismo, un certificado de la alcaldía o incluso la constancia escrita de alguien que lo conociera.

La sabida y aireada amistad personal entre López y Gómez no palió el ambiente de confrontación entre los dos partidos. La pertinaz determinación en aplicar ese conjunto de leyes, a todas luces revolucionarias, que se dieron en llamar la Revolución en Marcha y la oposición inmisericorde de

[7] HERNÁNDEZ GARCÍA, José Ángel. *La guerra civil española y Colombia,* Colombia, Editorial Universidad de la Sabana, 2006.

los conservadores y de la Iglesia, solo podía traer como consecuencia tiempos bruscos.

Para este arrojado proyecto de reformas constitucionales contó López con el apoyo de las bisoñas pero dinámicas asociaciones de izquierdas, en un espectro que iba desde la UNIR de Gaitán, pasando por los sindicatos y terminando en el Partido Comunista recién fundado en 1930. Con respecto a estos últimos, López Pumarejo nunca fue favorable a una alianza descarada y pública pero supo aprovecharse de ellos para sustentar su audaz proyecto político, apoyo del que el Partido Comunista no tuvo ninguna contraprestación evidente. Fue extremadamente hábil López en esa labor de ganar para su proyecto a las fuerzas y organizaciones de trabajadores a la vez que los neutralizaba y se erigía como representante de los anhelos de las masas proletarias y desfavorecidas. Una demostración clara de esa política fue la celebración del primero de mayo de 1936, hombro con hombro con los dirigentes del Partido Comunista.

Todo ello hizo que, como era previsible, el Partido Conservador y su indiscutido líder a la cabeza, Laureano Gómez, acusaran al ejecutivo de "bolchevique" y de querer aplicar en Colombia las mismas recetas frentepopulistas que habían llevado a España a la lucha fratricida que acababa de comenzar.

Respecto a estas acusaciones, López se expresaba de la siguiente manera:

> quienes se sorprenden de que el gobierno acepte el apoyo de que las masas le ofrecen cuando las minorías de oposición abandona[n] las vías democráticas se declaran insurgentes tampoco parecen ver con simpatía la política que sigue el gobierno de insurgencia de la oposición conser-

vadora en contraposición a la legalidad que el gobierno liberal decía representar[8].

Para octubre de 1935 se convocó a elecciones municipales unas elecciones a las que sí se presentaron los conservadores. Fue una campaña especialmente violenta en la que se contabilizaron algunos muertos y se cometieron varios ataques a los conservadores como en Cali, donde se incendió la sede conservadora, o Manizales, donde la sede del combativo diario *La Patria* fue invadida por una turba exaltada.

Nada se conjugaba para que en las toldas liberales y conservadoras reinara la calma. En el liberalismo dividido como consecuencia del radicalismo de la Revolución en Marcha, surgían los primeros críticos con López y su política de acercamiento a las fuerzas de izquierda y se empezaba a candidatizar a Eduardo Santos como futuro elegible en las elecciones de agosto de 1938 al considerársele un liberal más moderado que López. También vio López que desde la izquierda del Partido Liberal se le pedía más contundencia en las reformas sociales.

La aparición exitosa de la UNIR de Gaitán radicalizó al gobierno de López. La aparición de grupos violentos de izquierda, que consideraban a López y su administración demasiado dubitativos al aplicar las reformas prometidas, como el creado por el secretario de Partido Comunista Colombiano, Luis Vidales, y que actuó en el norte de Cundinamarca, centro y sur de Boyacá y algunas regiones del Huila. Otro grupo que adoptó la lucha armada desde la izquierda fue el que dirigió el indígena Quintín Lame en las montañas del Cauca.

[8] Tomado de: http://www.moir.org.co/Lopez-Pumarejo-Modernizacion-y.html

Por su parte, el Partido Conservador y su férreo líder Laureano Gómez veían con estupor e irritación cómo a la derecha de su partido proliferaban grupos de ultraderecha cuyo más destacado grupo fueron los dados en llamar los Leopardos. Estos grupos consideraban que la política de abstención propugnada por Laureano Gómez no había favorecido al Partido Conservador, pidiendo además el abandono de las convenciones democráticas para optar por vías más cercanas al fascismo o al falangismo.

PAUSA A LA REVOLUCIÓN EN MARCHA Y CONTINUACIÓN DE LA VIOLENCIA

Al llegar 1938, año de elecciones, la postura oficial del Partido Conservador era la de no concurrir a estas, al considerar conculcadas las garantías de los hipotéticos votantes conservadores, acosados, según ellos, por las instituciones del Estado y en particular por la contumaz anti conservadora policía liberal.

Decide el Partido Liberal concurrir a las elecciones con un candidato más moderado y conciliador y el elegido es Eduardo Santos. Era Eduardo Santos un personaje prestante del liberalismo al que había ayudado desde las páginas del influyente diario *El Tiempo*. Desde este periódico se había allanado el camino a la llegada del presidente Olaya y el fin de la Hegemonía Conservadora. En pago a lo anterior fue nombrado por este, canciller primero y luego representante ante la Sociedad de Naciones con el cometido de defender los intereses colombianos en las negociaciones sobre el contencioso de Leticia con Perú.

Santos fue elegido sin oposición, como ya dijimos, al no participar el Partido Conservador en los comicios. Su polí-

tica es conocida, para algunos estudiosos de la época, como la política de "la Gran Pausa" a la "Revolución en Marcha" de su antecesor, por decirlo de otra manera, a la política reformadora y revolucionaria de López sucedía la moderada y centrista de Santos.

Se acababa con Santos el hecho de confundir liberalismo con socialismo y mucho menos de aparecer de la mano públicamente con comunistas y sindicalistas, y eso que estos habían votado mayoritariamente por él en las ulteriores elecciones. Fue Santos, amigo de industriales y fiel ejecutor de los pedidos norteamericanos a su gobierno como asevera el embajador norteamericano Spruille Braden, lo que hizo de Colombia un fiel aliado de los Estados Unidos en su esfuerzo durante la Segunda Guerra Mundial.

Así lo afirma Eugenio Gómez, en la revista *Credencial*, citando al historiador Marcos Palacios, de él diciendo que era un "conciliador por temperamento" y que no tenía por qué cortejar a la izquierda. Lo que no cabe la menor duda es que Santos fue un fiel seguidor y ejecutor de la tradicional política de la oligarquía liberal.

Lo enumerado sobre la personalidad política de Santos poco sirvió para que no surgieran nuevos enfrentamientos con el conservatismo y con su líder Laureano Gómez, con el que no tenía Santos la empatía que se había dado, aunque con altibajos, entre aquel y López.

La negociación de un concordato con la Iglesia católica fue vista por Gómez como una conspiración de la masonería, además, la política exterior pro aliada y anti hitleriana de Santos no fue apoyada por el Partido Conservador en esos años.

La personalidad conciliadora de Santos no encontró la mano tendida desde el conservatismo y los enfrentamientos en las veredas y pueblos de Colombia continuaron entre los simpatizantes de ambos partidos, aunque ha de destacarse que en las grandes ciudades y muchos de los departamentos de Colombia el conflicto no llegaba a las armas salvo excepciones contadas. El foro parlamentario se convirtió en el canalizador de las acusaciones mutuas, destacando Laureano Gómez con su oratoria sin rival e inmisericorde.

Así fue hasta que en la provincia de Guavio, a la que se suponía de mayoría conservadora, se convocó una concentración conservadora en Gachetá que fue permitida por las autoridades pero que fue escrupulosamente fiscalizada por la policía.

Como apunta de manera rigurosa y precisa el historiador Javier Guerrero, la zona de Gachetá era, desde hace años, una zona de conflicto permanente entre los conservadores locales y las autoridades liberales[9].

Santos había prometido seguridades a los conservadores en todo el territorio nacional y la verdad es que Laureano Gómez había constatado el nuevo clima más pacífico y lo había reconocido ante Santos, como este último se encargó de airear en la Radio Nacional el 25 de octubre de ese año.

Por eso, cuando a los dos meses de su toma de posesión llegaron las primeras noticias de una masacre de conservadores perpetrada por los policías y civiles liberales en Gacheta, se declaró especialmente sorprendido.

Era el 8 de enero de 1939 y los conservadores que se iban concentrando, previa requisa, en la plaza de Gachetá, veían cómo eran insultados por los liberales parapetados tras la

[9] Ibíd; 4.

policía. Cuando los conservadores, anteriormente desarmados respondieron a las provocaciones, la policía abrió fuego sobre la multitud cayendo allí mismo nueve individuos y una cantidad importante de heridos de los que tres murieron en días posteriores.

> Laureano Gómez, a la sazón en su finca de Fontibón, al saber sobre las muertes fue directamente al palacio Nariño, como el mismo cuenta: "y sucedieron los asesinatos de Gachetá estaba yo ausente de la capital cuando llegaron las noticias; vine directamente a palacio y le dije al doctor Santos… Los datos que han llegado demuestran que los muertos, los heridos han sido ocasionados por las almas oficiales, por las autoridades. Se sabe que los asesinos, los principales autores de la matanza se están paseando todavía, 48 horas después, con el rifle al hombro por las calles del pueblos es indispensables que los reduzca, es necesario que investigue y entonces me inventaron "la teoría del orden jurídico", el gobierno no podía hacer nada porque el orden jurídico le impedía quitarles los fusiles de los hombros a los asesinos mientras en la plaza del pueblo yacían los muertos y estaban llegando los heridos a morir al hospital de San José ¡no pude conseguir nada! El presidente se negaba a todo, con las sutiles excusas anteponiendo ante todo el orden jurídico: "¿y el orden jurídico a donde estuvo para los que fueron asesinados?"[10].

A pesar de lo dicho por Laureano Gómez, se abrió una investigación que se encontró con el valladar de las autoridades locales; a esto, el día 13 de enero veintitrés personas estaban detenidas y el día 21 *El Siglo* informaba del descubrimiento de un arsenal supuestamente utilizado por los asesinos.

[10] EMILIANI ROMÁN, Raimundo. *Laureano el grande,* Colombia, Editorial Retina, 1989.

La edición de *El Siglo* del día 26 informaba de la detención de algunos sospechosos de los asesinatos y daban nombres, a saber: Dagoberto Ocampo, Felipe Garavito y Reinaldo Martín, alias "Chicharrón", también daba los nombres de los aún no detenidos pero también sospechosos, el teniente de la policía Salazar Ferro, Guzmán Blanco y un tal "Asís", que llegaron "con fuerte escolta ayer a Bogotá". Cuatro meses después, un auto del procurador general de la Nación desautorizó al fiscal y al juez, y ordenó la libertad de todos los encausados.

El asunto siguió en los titulares de los periódicos que dieron cuenta de los debates que sobre el asunto se dieron el día 4 de mayo en el Senado y en el que intervinieron del lado conservador el diputado Leyva y el nacionalista independiente Fandiño Silva. En junio se vuelven a constatar disturbios en Gachetá, en donde se tiene constancia de la participación en los mismos de "Chicharrón", uno de los principales implicados en la matanza de enero.

Para el año 1941 los jueces aún no tenían claro quiénes eran los asesinos, o no querían saberlo según el diario, *El Siglo*, por lo que el castigo a los asesinos aún no se había dado hasta principios de junio en que fueron detenidos Daniel Salazar Ferro, Francisco Fajardo Benítez, Jorge Pinilla, Guillermo Carrasco Urdaneta y Enrique García Olarte. Parecía que la justicia seguía su curso, aunque lentamente, pero ya en la segunda administración de López, en noviembre de 1942, *El Siglo* informaba de la huida de los detenidos que después de seis años aún continuaban en libertad, no siendo juzgados hasta la llegada del gobierno conservador de Mariano Ospina, en 1946.

CONCLUSIÓN

Si el 9 de abril y el asesinato del líder populista Gaitán ha quedado en el imaginario colombiano como el comienzo de la violencia sectaria en el país, la matanza de Gachetá es recordada por el conservatismo como el hito del que arranca la violencia partidista en la República de Colombia.

La matanza de Capitanejo al principio de los años treinta y la de Gachetá al final del decenio serían el comienzo y el final del periodo de violencia en los años treinta, una violencia en la que los conservadores llevaron la peor parte, "acusados y martirizados" por la "nefasta república liberal", una era que se convirtió en referencia en la psique victimista conservadora.

Difícilmente es rebatible la parcialidad de las nuevas autoridades liberales recién llagadas a labores de gobierno a principios de los años treinta, más preocupadas de vengar los años que intentaron vivir bajo la Hegemonía Conservadora que de "normalizar" las instituciones de un estado democrático estándar en el que decían estar gobernando.

En aras de la ecuanimidad, la primera estupefacción de los conservadores por perder los puestos de gobierno y administración, el desquite evidente de los liberales, más la llamada a "la resistencia civil" y a la "legítima defensa" de su líder Laureano Gómez, desembocaron en un acoso constante a un gobierno salido de las urnas, como era el de los liberales en los años treinta.

Terminaban los años treinta con un ambiente social turbulento, lo mismo que el político. La vuelta de López Pumarejo al poder no calmó la tensión y se auguraban tiempos convulsos, como sucedió durante los años cuarenta y posteriores del siglo XX.

La victoria del Partido Conservador en 1946 no aplacó las conciencias. Y eso que ya no era el Partido Conservador el que denunciaba el fraude electoral, que para ellos era igual a violencia, sino que ahora eran los liberales los que se sentían agraviados empezando a sentar las bases de la futura insurgencia que dura hasta hoy en día en Colombia.

12

Cuadernos del Centro de Pensamiento

Fondo de Publicaciones
Universidad Sergio Arboleda

ISSN 2346431-3

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA | CENTRO DE PENSAMIENTO

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA
Carrera 15 No. 74-40 Tels.: (571) 325 7500 Ext. 2131 - 322 0538. Bogotá, D.C.
Calle 18 No. 14A-18 Tels.: (575) 420 3838 - 420 2651. Santa Marta
www.usergioarboleda.edu.co